

EDITORIAL

Los países centroamericanos se debaten actualmente en la crisis económica, política, social y militar más profunda de su vida independiente. Las manifestaciones de esta crisis se perciben no sólo a través del auge de la violencia y de los conflictos político-militares, sino también, por medio de los principales indicadores macroeconómicos que muestran cómo, durante los últimos dos años, los países del área han experimentado bajas tasas de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (Costa Rica tuvo un decrecimiento de -6.3%, El Salvador de -4.5%, Guatemala de -3.5%, Nicaragua de -2.0% y Honduras de -1.5%); saldos negativos en la balanza de cuenta corriente que ascienden a más de -1,455 millones de dólares; una deuda pública externa conjunta que sobrepasa los 8,762 millones de dólares; y un deterioro absoluto en las condiciones de vida de la mayoría de su población (el Producto Interno Bruto por habitante en El Salvador decreció en 1983 en 8% respecto al año anterior).

A las causas estructurales que históricamente han configurado nuestras sociedades (concentración de la riqueza, desigual distribución del ingreso, aplicación de modelos de "desarrollo" no adecuados, imposición de regímenes militares, fraudes electorales, etc.) se añaden nuevos elementos constitutivos que han tornado la situación en general, más compleja.

Uno de estos elementos lo constituye la creciente ingerencia de los EUA en todos los ámbitos de la vida de nuestros pueblos y que, a raíz de la problemática nicaragüense y salvadoreña, ha llegado a niveles insospechados de beligerancia. Prueba de ésto lo es la invasión directa en Grenada; la instalación de bases militares en Honduras y la existencia de planes para el establecimiento de otras bases en diversas partes de la región, incluyendo El Salvador; el incremento en las maniobras militares encaminadas a demostrar la capacidad que tienen los EUA en controlar importantes puntos del Caribe y el Golfo de México; la amplia ayuda militar y económica al gobierno de El Salvador para la lucha contra-insurgente; y la ayuda abierta y encubierta a los contrarrevolucionarios nicaragüenses para desestabilizar al régimen sandinista.

El Presidente Reagan ha justificado la toma de estas medidas arguyendo que lo que realmente está en peligro en el Caribe y Centroamérica es ante todo "la seguridad nacional de los Estados Unidos" y el "bienestar de su pueblo".

Es entendible que los EUA tengan y defiendan sus intereses objetivos en la región. Sin embargo, pese a insistirse tanto en tales argumentos, no termina de quedar bien explicitado y definido, en qué consisten y cuál es la naturaleza de los intereses que Washington pretende defender en el área.

Una forma posible de interpretación sería la identificación de los intereses del pueblo y nación norteamericana, con los intereses de los grupos y consorcios transnacionales de origen norteamericano que operan en toda la Cuenca del Caribe. Para nadie es un secreto la importancia que han llegado a tener en los últimos veinte años: en 1982, sus inversiones en el área ascendían a más de 24,000 millones de dólares; de un total de 614 establecimientos transnacionales instalados en Centroamérica, el 84% eran de origen norteamericano y las retribuciones a la inversión extranjera directa para el período 1978-80 habían sido de 1,755.3 millones de dólares; en El Salvador, el total de empresas vinculadas al capital extranjero habían remitido más de 93 millones en regalías y dividendos en un período de 6 años; y la principal extracción y refinanciamiento de petróleo en Guatemala y Honduras la realizan compañías directa e indirectamente vinculadas con capital norteamericano.

Tampoco es un secreto que, a lo largo de los últimos 30 años, estas compañías no sólo han gozado de extraordinarias concesiones en infraestructura, energía subvencionada, incentivos fiscales y exoneraciones arancelarias en los países en que han operado, sino también, en reiteradas ocasiones, más de algún gobierno de la región ha sido "puesto" o "depuesto" de acuerdo a sus "gustos" y "preferencias".

Otra interpretación podría ser que Washington tuviera un interés muy especial en ejercer y mantener cierto control sobre la vida política de estos pueblos para beneficio, no sólo de los consorcios transnacionales, sino de sus intereses geo-políticos como superpotencia.

Sin embargo, ambas interpretaciones parecen ser inaceptables para los pueblos del área y, ciertamente, han colocado y pueden colocar a los EUA en un curso de colisión frontal, no sólo con los diferentes movimientos políticos revolucionarios de oposición, sino con fuerzas democráticas tradicionalmente aliadas de los EUA. Los pueblos de esta región han ido adquiriendo cierta madurez política que puede hacer inaceptable el hecho de que los intereses particulares de las compañías transnacionales, o la sumatoria conjunta de las mismas, estén determinando tanto la política exterior de los EUA hacia la región, como los patrones de bienestar y desarrollo a seguir.

El gobierno norteamericano y las futuras administraciones deben entender que, en aras de una mayor cooperación y entendimiento que asegure tanto el progreso y bienestar de todos en esta región, así como el de sus intereses de superpotencia, hay que revisar y repensar la política hacia Centroamérica y el Caribe, buscando relaciones de mutuo respeto con todos los países de la región y que, ésto sólo es alcanzable, con la existencia de gobiernos que hayan sido plenamente legitimados y respaldados por sus pueblos. De lo contrario, la desestabilización y la crisis seguirán siendo lo dominante en nuestra región.

San Salvador, Diciembre de 1983